

100-23.07

AUTO No. 092

Santiago de Cali, primero (1) de octubre dos mil doce (2012)

**“POR EL CUAL SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO FISCAL”**

EXPEDIENTE No. 065-12

COMPETENCIA

El Contralor Departamental del Valle del Cauca, es competente para iniciar y fallar la presente acción administrativa y fiscal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 268 numeral 5, de la Constitución Política, en armonía con el artículo 272 ibídem; artículo 101 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Resoluciones 100-28.02 007 del 18 de abril de 2012, artículo 2º “Por la cual se modifica el procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca”.

Resolución Reglamentaria No. 006 de julio 12 de 2011, artículo 63,64,65, Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General. (f. 2)

ANTECEDENTES E IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO VINCULADO

El Doctor JAIRO RODRIGUEZ PEDROZA, Subdirectora Operativo Financiero y Patrimonial, con oficio No. 130-23 CACCI No. 10130 del 24 de Septiembre de 2012, solicitó al despacho del señor Contralor Departamental del Valle del Cauca, inicio del presente Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en contra de los doctores **GERARDO GÓMEZ DIEZ y JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**.

El doctor **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, aparece cedulaado con el No. 6.458.198 expedida en Sevilla Valle, Alcalde Municipal de Sevilla Valle, según Acta de posesión fechado el 1 de enero de 2008, (f.5,6)

El doctor **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, aparece cedulaado con el No. 94.281.796 expedida en Sevilla Valle, Alcalde (E) Municipal de Sevilla Valle, según Acta de posesión fechado el 30 de marzo de 2011, (f. 8,9)

La documentación remitida consta de 61 folios, y señala como hechos reportado como infracción *“Una vez revisada la información y confrontada con los informes de Deuda Pública, emitidos por este ente de control y enviados a la Contraloría General de la República, y que consolidado el informe... se observa, que efectivamente el municipio de Sevilla adquirió un empréstito por \$3.000.000.000 con el Banco Agrario y que firmó el contrato de empréstito, por su representante legal el 14 de marzo de 2011, sabiendo que a partir de los 15 días siguientes debía registrar la operación de crédito y por ende presentar trimestralmente el formato SEUD, (Rendición de la Deuda Pública). Situación que NO ha hecho*

hasta la fecha, contrariando la Resolución Reglamentaria 006 de julio de 2011 y las Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General". (f. 1,2)

La presente actuación se sustenta, en los siguientes:

HECHOS

1. El doctor **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, aparece cedulaado con el No. 6.458.198 expedida en Sevilla Valle, Alcalde Municipal de Sevilla Valle, y el doctor **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, aparece cedulaado con el No. 94.281.796 expedida en Sevilla Valle, Alcalde (E) Municipal de Sevilla Valle, ambos sujeto pasivo de la acción Administrativa Sancionatoria Fiscal, calidad que se encuentra probada con las Acta de posesión fechado el 1 de enero de 2008 y Acta de posesión fechado el 30 de marzo de 2011 (f.5,6,8,9)
2. Los doctores **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, Alcalde municipal de Sevilla Valle, y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ** Alcalde (E) de la misma municipalidad, conocido de autos, presuntamente desatendieron el siguiente deber fiscal:

A) Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 006 de 12 de julio de 2011 artículo 63,64,65, se infringió a decir del Subdirector Operativo Financiero y Patrimonial **Capítulo III Refrendación Y Registro De La Deuda Pública**

***"Artículo 63. Operaciones De Crédito Público.** En concordancia con el Artículo 3o del Decreto 2681 de 1993, parágrafo 2 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los Artículos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999, son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo superior a un año para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Son documentos de deuda pública los bonos, pagarés y demás títulos valores, los contratos y los demás actos en los que se celebre una de las operaciones de crédito público, así mismo aquellos documentos que se desprendan de las operaciones propias del manejo de la deuda tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capitalización con venta de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen.*

También los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que emitan las entidades estatales así como aquellas entidades con participación del Estado superior al cincuenta por ciento, con independencia de su naturaleza y del orden al cual pertenezcan.

No se consideran títulos de deuda pública los documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo menor a un año para su redención que emitan los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, excepto los que ofrezcan dichas entidades en los mercados de capitales internacionales con plazo mayor a un año, caso en el cual requerirán de la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su emisión, suscripción y colocación, y podrán contar con la garantía de la Nación.

Artículo 64. Refrendación. Para efecto del presente capítulo, se entenderá como refrendación de los documentos constitutivos de Deuda Pública, la expedición del Certificado de Registro de la misma, por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

Artículo 65. Certificado de Registro de Deuda Pública. Para efectos de la expedición del certificado de registro de deuda pública externa e interna las entidades prestatarias deberán presentar ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato de deuda, los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio firmado por el Representante Legal en el cual solicite se le expida el certificado de registro del crédito.
2. Proyecto de inversión presentado al Concejo Municipal o Junta Directiva para solicitar facultades de celebración de operaciones de crédito público.
3. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales (Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222 de 1986), referidos al proyecto específico de inversión.
4. Copia del acto administrativo vigente, mediante el cual se faculta al ordenador del gasto para celebración de operaciones de crédito público (Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222 de 1986), referido al proyecto específico de inversión.
5. Certificación de la firma calificadora de riesgos (para Departamentos, Distritos y Municipios de categoría especial, 1, 2 y Entes Descentralizados Artículo. 16 del Decreto 819 de 2003, Artículo. 1º del Decreto 610 de 2002.).
6. Fotocopia del contrato o documento donde conste la obligación debidamente perfeccionado.
7. Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato.
8. Traducción oficial en idioma español del respectivo contrato o documento donde conste la obligación, cuando se trate de empréstitos externos.

9. *Copia de la certificación expedida por el Contralor Delegado para la Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República sobre el total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el cumplimiento de los techos de la Ley 617/2000 Art. 90.*
10. *Copia del certificado de registro de operaciones de crédito público expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*
11. *Copia del Marco Fiscal de Mediano Plazo y sus modificaciones, presentado en la vigencia anterior al Concejo Municipal o Asamblea Departamental.*
12. *Análisis de Capacidad de Endeudamiento de acuerdo con el anexo 4 del procedimiento "REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO", en medio magnético y físico debidamente firmado.*
13. *El Balance Financiero de la vigencia anterior de acuerdo con el anexo 3 del procedimiento "REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO", en medio magnético y físico debidamente firmado.*
14. *Ejecución presupuestal de ingresos y gastos al 31 de Diciembre de la vigencia anterior, debidamente firmado por el Representante Legal y el Jefe de Presupuesto de la entidad, con la que se elaboró la capacidad de endeudamiento y el balance financiero.*

Parágrafo: *Si dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato de deuda de que trata el presente artículo, la entidad no cuenta con copia del certificado de registro de operaciones de crédito público expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se exige en el numeral 10, la entidad deberá presentar a esta Contraloría, copia del oficio de solicitud de registro radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.*

Una vez la entidad cuente con el certificado de registro expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo remitirá a esta Contraloría para que se continúe con el procedimiento de registro de la operación de crédito respectivo.

- B) Artículos 4º, numeral 2 literal b, e y h, de la Resolución Reglamentaria 100-28.02 007 de abril 18 de 2012 y artículo 78 de la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02-006 de julio 12 de 2011, circular S/N fechado el 27 de febrero de 2012, CACCI 1218 sobre rendición de formato Fiducia.

FUNDAMENTO DE DERECHO

C.P. Art. 268.5 y 272

Ley 42 de 1993, artículo 99 al 102

Parte primera del Código Contencioso Administrativo, en lo pertinente.

Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 007 de abril 18 de 2012, “*por el cual se modifica el procedimiento para el trámite del proceso administrativo sancionatorio fiscal y se deroga una resolución*”.

Resolución Reglamentaria No 100-28.02 006 del 12 de julio de 2011, “*por medio del cual, se prescriben los métodos, la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica su información*”

Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General.

ANALISIS PROBATORIO Y DECRETO PRUEBA

El Despacho tiene como prueba la documentación soporte anexa a la solicitud de inicio del presente proceso, así:

1. Fotocopia Cédula de ciudadanía **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, (f. 4).
2. Fotocopia Cédula de ciudadanía **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ** (f.7)
3. Fotocopia Acta de posesión como Alcalde Municipal Sevilla **GERARDO GÓMEZ DIEZ** (f. 5,6).
4. Fotocopia Acta de posesión como Alcalde (E) Municipal Sevilla **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ** (f. 8,9).
5. Fotocopia Decreto No. 036 de marzo 28 de 2011 (f.10)
6. Fotocopia Acuerdo No. 005 del 6 de julio de 2010 (f. 11 a 26)
7. Fotocopia Banco Agrario de Colombia, del 19 de enero de 2011, (f. 27,28)
8. Fotocopia Contrato de Empréstito y Pignoración entre Banco Agrario y Municipio de Sevilla (f. 29 a 37)
9. Fotocopia Superintendencia Financiera de Colombia (f. 38 a 41)
10. Fotocopia Créditos vigentes registrados por Minihacienda (f. 42)
11. Fotocopia deuda pública cuarto trimestre 2011; primero trimestre 2012; tercero (f.43 a 45)
12. Fotocopia Evaluación y análisis del marco fiscal de mediano plazo municipio de Sevilla (f. 46 a 56)
13. Oficio 130-19.27 CACCI 5680 requiriendo registro de deuda Pública, al Alcalde de Sevilla Rafael Andrés Quintero Ceballos (f. 57 a 59)
14. Fotocopia oficio 130-19.27 CACCI 9556 informando al Director Operativo de Control Fiscal, sobre documentos crédito sin registro (f. 60.61)

Los doctores **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, tenía conocimiento de la obligación fiscal de rendir conforme Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 006 de 12 de julio de 2011 artículo 63,64,65, de obligatorio cumplimiento dado el deber que tiene todo servidor público cuando toma posesión del cargo, jura cumplir con la Constitución, Ley, Ordenanzas, Acuerdos, etc.

La obligación fiscal que se le reprocha al sujeto aquí vinculado, se encuentra signada en la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 006 del 12 de julio de 2011, que en su artículo 63,64,65 los cuales ya fueron claramente mencionados .

El los sujetos procesales, estaba obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales, sin embargo, no dieron cumplimiento el cual es objeto de reproche, sin

justificación alguna, por tanto, este despacho tiene la atribución legal y reglamentaria de llamar al orden a los sujetos de control fiscal cuando actúan en contravía de los procedimientos y términos conferidos.

DECRETO PRUEBA

Solicitar a la Alcaldía Municipal de Sevilla, lo siguiente:

1. Fotocopia hoja de vida de los sujetos procesales GERARDO GÓMEZ DIEZ, y JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ.
2. Print RCL de rendición.
3. Fotocopia declaración juramentada de bienes y rentas de los sujetos procesales **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**.
4. Fotocopia manual de funciones.
5. Fotocopia póliza.

Solicitar a la Subdirección Operativa Financiera y Patrimonial

1. Anexar fotocopia Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General.

INDICACION DE LA CAUSAL PRESUNTAMENTE INFRINGIDA

La presunta omisión de los sujetos de control fiscal, **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, Alcalde Municipal de Sevilla y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**. Alcalde (E) Municipal de Sevilla, respecto del hecho anotado en el punto anterior, se subsume en causales del artículo 101 de la ley 42 de 1993, entre ellas:

“...no rindan las cuentas o informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas... no cumplan con las obligaciones fiscales”, acontecer fáctico que fuerza a este despacho, en virtud del informe elevado por el Subdirector Operativo Financiero y Patrimonial, dar inicio al presente Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

ANALISIS DE LA CULPABILIDAD

Siendo de naturaleza administrativa, el proceso administrativo sancionatorio fiscal, se debe tener en cuenta que en tal caso, no basta la comisión de la conducta reprochable para endilgar responsabilidad, sino que se requiere que previamente se realice una valoración de la actuación del agente, con el objeto de determinar su grado de participación efectuando un examen sobre las circunstancias que pudieron haber incidido en la realización del comportamiento reprochado.

Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad.

En la Constitución de 1991, respecto de las actuaciones administrativas, quedó proscrita la responsabilidad objetiva, es decir, que a raíz de sus postulados, se ha venido señalando jurisprudencial y doctrinariamente unas directrices específicas que se deben atender, en materia de derecho administrativo sancionatorio. En este sentido, el Consejo de Estado¹ se ha pronunciado sobre este aspecto, para enseñar que la culpabilidad debe estar demostrada como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones administrativas. Igual posición ha asumido la Corte Constitucional².

En virtud a lo anterior, en el caso de autos, encontramos que los actores, en su calidad de gestor fiscal, en ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de Sevilla y Alcalde (E) de la misma municipalidad, deben ser conscientes de su obligación legal de registrar la operación de crédito y por ende presentar trimestralmente el formato SEUD, situación que NO ha hecho hasta la fecha y que requería el ente de control, de conformidad a la Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General, tal como lo señala el Subdirector Operativo Financiero y Patrimonial, indudablemente pertenece a la órbita de la competencia y a la misma naturaleza del cargo que desempeñaban, lo cual les impone un actuar diligente, cuidadoso y eficiente, fundado en la eficiencia y eficacia de acatar las obligaciones fiscales anejas a su empleo, impuestas por la Contraloría, conforme lo dispuesto en la ley 42 de 1993, amén de lo regulado en la Resolución 100-28.02 006 del 12 de julio de 2011, expedida por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la cual en su artículo 63,64,65 y la Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General así lo dispone, sin embargo, los referido sujeto incumplieron en su presentación.

El reproche formulado a los Dres. **GERARDO GÓMEZ DIEZ, y JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**. Alcalde Municipal de Sevilla y Alcalde (E) de la misma municipalidad, se subsume en el grado de culpa grave, por haber omitido el cumplimiento del deber ser, en concordancia con la reglamentación legal e interna arriba citada, por lo que esta apreciación corresponde a una calificación provisional de culpabilidad, observando que ésta situación, no es óbice para que el debate probatorio permita al funcionario de instancia imponer o no la sanción respectiva, siempre y cuando esté suficientemente justificada y soportada.

Con esta disquisición se cumple con el requisito del numeral 7º del artículo 7º de la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 007 del 18 de abril de 2012, que exige para dar inicio a la acción sancionatoria fiscal, el análisis de la conducta que genere la posible sanción, determinando si el sujeto pasivo de la misma, actuó a título de dolo o culpa grave, dado que en caso de autos, no se encuentra causales de fuerza mayor o caso fortuito, es decir circunstancias imprevisibles, que forzaron al susodicho a incumplir la obligación fiscal reprochada.

Del análisis efectuado a los hechos y a las normas anteriormente citadas, se infiere que la conducta de los presuntamente responsables, aparentemente se subsume dentro de la descripción del supuesto especificado en el numeral 4º del artículo 268 de la Constitución Nacional, donde se consagra la exigencia de informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la

¹ Consejo de Estado, Sección Cuarta Expediente 12094 de 18 de abril de 2004

² Corte Constitucional Sentencia de Tutela 145 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

Nación, en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el literal b, e, h, numeral 2º del artículo 4 de la Resolución 100-28.02 007 de 2012, emanada de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que prevé que quien incurra en alguna de las conductas contempladas en dicha disposición, dará pie al presente investigativo.

Es así, como el ordenamiento jurídico fiscal le impone a los doctores **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, Alcalde Municipal de Sevilla y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**. Alcalde encargado, la obligación legal de registrar la Operación de Crédito y por ende presentar trimestralmente el formato SEUD, situación que NO se ha hecho ante el órgano de control, conforme lo dispuesto en el artículo 63,64,65 de la Resolución Reglamentaria 06- de 2010 y la Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General, se da inicio al presente proceso, con el fin de dilucidar si dicha omisión fue con calificación provisional aquí endilgada.

MEDIOS DE DEFENSA

Con el fin de efectivizar el debido proceso y su garantía inherente del derecho de defensa o contradicción, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 007 de abril 18 de 2012, artículo 7º numeral 8, y artículo 9º ibídem, se le informa a los sujeto vinculado a la presente actuación, que dispone de un término de (15) días hábiles, contados, a partir de la respectiva notificación, con el fin de que presenten por escrito las explicaciones e informaciones necesarias o en su defecto, se presenten a rendir versión libre, así como aportar y solicitar las pruebas que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

En virtud a lo anterior, los Drs. **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, Alcalde Municipal de Sevilla y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**. Alcalde encargado, a partir de la notificación de la presente actuación, dispone del término arriba informado para el ejercicio de su derecho de defensa o contradicción.

CONSIDERACIONES

La potestad sancionatoria de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se circunscribe al ámbito de aplicación del artículo 268 numeral 5º, lo que significa que los Contralores en el ámbito de su jurisdicción son competentes para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva.

El desarrollo legal del mencionado mandato constitucional (art. 268.5), para el caso que nos ocupa, se encuentra en la Ley 42 de 1993, artículo 101, que faculta a los Contralores a imponer multas a los servidores públicos y particulares con calidad de gestores fiscales, cuando incumplan sus obligaciones fiscales, esto en armonía con los reglado internamente en el artículo 4 de la Resolución 100.28.02.007 de 2012, que consagra las conductas que son constitutivas de sanción.

Del análisis efectuado a los hechos y a las normas anteriormente citadas, se infiere que la conducta de los presuntamente responsables, aparentemente se subsumen dentro de la descripción del supuesto especificado en el numeral 4º del artículo 268 de la Constitución Nacional, donde se consagra la exigencia de informes sobre su gestión fiscal, a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación, en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el literal b, e y h del numeral 2º del artículo 4º de la Resolución 100.28.02-007 de 2012, emanada de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que prevé que quien infrinja alguna de las conductas de dicha disposición, dará pie al presente investigativo.

Es así como el ordenamiento jurídico fiscal le impone a los Dres. **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, aparece cedulaado con el No. 6.458.198 expedida en Sevilla Valle, Alcalde Municipal de Sevilla Valle, y el doctor **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, aparece cedulaado con el No. 94.281.796 expedida en Sevilla Valle, Alcalde encargado, dar cuenta del incumplimiento al no registrar la Operación de Crédito y por ende presentar trimestralmente el formato SEUD, situación que NO se ha hecho.

Faltando a una Obligación Fiscal, estipuladas en el artículo 78 de la Resolución Reglamentaria No. 100-28.02 006 de julio 12 de 2011 artículos 63,64,65 y la Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General, dentro del procedimiento y término fijado para ello, como no lo hizo, se da inicio al presente proceso, con el fin de dilucidar si dicha omisión fue con culpabilidad.

COMISION

Comisionar a la Secretaría General para que instruya la presente actuación a través del Profesional adscrito a ese despacho, con el fin de que sustancie el presente proceso, con la celeridad y economía procesal debida, garantizando el derecho al debido proceso.

En mérito de lo expuesto, la Contralora Departamental del Valle Cauca,

RESUELVE

PRIMERO. Aperturar el presente Proceso Sancionatorio No. PS-065-12, contra los doctores **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, cedulaado con el No. 6.458.198 expedida en Sevilla Valle, Alcalde Municipal de Sevilla Valle, y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, cedulaado con el No. 94.281.796 expedida en Sevilla Valle, Alcalde encargado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Tener como pruebas los documentos remitidas con la solicitud de inicio de esta actuación y su vez ordenar de oficio la práctica de la siguiente.

Solicitar a la Alcaldía Municipal de Sevilla, lo siguiente documentos correspondientes a los señores GERARDO GÓMEZ DIEZ, y JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ:

1. Fotocopia hoja de vida de los sujetos procesales.
2. Print RCL de rendición.
3. Fotocopia declaración juramentada de bienes y rentas
Fotocopia manual de funciones.
4. Fotocopia póliza.

Solicitar a la Subdirección Operativa Financiera y Patrimonial

1. Anexar fotocopia Resoluciones 5544 de 2003 y 5993 de 2008 capítulo V de la Contraloría General.

Las que aporte y solicite el sujeto, para cuyos efectos se delega en la Secretaría General la sustanciación del presente expediente, para dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

TERCERO. Los sujetos procesales, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente auto, puede presentarse a rendir versión libre o escrito con sus explicaciones y aclaraciones.

CUARTO. Comisionar a la Secretaria General para que instruya el presente con el personal adscrito, conforme al reparto al funcionario que corresponda a fin de que sustancie el presente proceso, con la celeridad y economía procesal debida.

QUINTO. Notificar la presente decisión al doctor **GERARDO GÓMEZ DIEZ**, Alcalde Municipal de Sevilla Valle, y **JUAN CARLOS OCAMPO SÁNCHEZ**, Alcalde encargado, conocido de autos, en el término de los artículos 67 y 68 del Código Contencioso Administrativo, en la Calle 58 No. 50-43 barrio el Carmen Sevilla, tel. 2196052 y Calle 51 No. 50-10 barrio el Carmen Sevilla, tel. 2196052 respectivamente advirtiéndole que contra el presente auto no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA (Firmado)
Contralor Departamental del Valle del Cauca